

deberá establecer, en el Informe de Finanzas (IFP) inmediatamente posterior, las acciones necesarias para retornar a una situación fiscal



El ministro Marcel profundizó en el debate fiscal.

HACIENDA

**El ministro de Hacienda dijo que a mediados de abril se darán a conocer las medidas correctivas tras el incumplimiento de la meta fiscal en 2024.**

**“Mientras el voluntarismo conduce a una agudización de las tensiones, la motosierra pone en peligro el pacto social que subyace a la estabilidad y voluntad de progreso del país”, dijo.**

## Ministro Marcel rechaza uso de “motosierra” y plantea medidas para ahorrar US\$ 1.540 millones

POR SEBASTIÁN VALDENEGRO

Una extensa presentación referida a temas fiscales realizó este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco del seminario “La ruta para el crecimiento”, organizado por el Banco de Chile y Banchile Inversiones.

La ponencia del secretario de Estado se da en momentos en que se ha cuestionado el manejo de las finanzas públicas, con una meta de déficit que se incumplió en 2024 y en momentos en que su cartera prepara un nuevo ajuste del gasto público que conocerá en abril.

De entrada, identificó cinco “afirmaciones erradas” presentes en el debate público sobre la situación fiscal: que el Gobierno ha incumplido todas sus metas fiscales; que Hacienda ha cometido errores sistemáticos en las proyecciones de ingresos; que el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento de personal; que la deuda pública ha crecido como nunca; y que se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile.

Sobre la primera, señaló que el

■ El titular de Hacienda arremetió contra algunas propuestas en el debate público para racionalizar el gasto público, como reducir personal de confianza o clausurar programas estatales mal evaluados.

2024 fue el primer año de la actual administración donde hubo un desvío de sus metas, luego de cumplir o sobrecumplir las expectativas en 2022 y 2023, con un “histórico” ajuste del gasto en 2022, dijo Marcel.

En cuanto a los errores de estimaciones de ingresos fiscales, el ministro enfatizó que la era post-Covid ha sido “desafiante” para muchos países en la conducción de la política fiscal, por ejemplo, respecto a retomar un gasto de salud similar a la etapa previa a la emergencia sanitaria, además de producirse brechas en recaudación

tributaria que podrían responder a fenómenos estructurales.

En cuanto al gasto público “disparado”, Marcel matizó que como porcentaje del PIB, se ubica en niveles similares a la etapa pre-pandemia, de 24,7% del Producto. Mientras que respecto del alza de los funcionarios públicos, argumentó que se ha centrado en los servicios de salud y en Educación por los trasposos de personal desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). De hecho, dijo que al limpiar el efecto de esos factores, el aumento del empleo público neto es menor al 3% en tres años.

En cuanto a la deuda pública, recalcó que si bien ha aumentado a niveles por sobre 42% del PIB, el ritmo de crecimiento ha sido menor que en gobiernos anteriores, lo que ha permitido ahorrar US\$ 20.000 millones frente a la tendencia de años previos.

Finalmente, en cuanto a la pérdida de reputación fiscal de Chile, matizó que indicadores de riesgo país, como el índice EMBI de JP Morgan y los Credit Default

Swaps (CDS) a cinco años, se han reducido en 2025 respecto a 2024.

### Los espejismos

Marcel pasó a la ofensiva y aludió a cinco “espejismos” que se han considerado como alternativas en el debate público para ajustar las finanzas públicas: congelar el empleo público; reducir los gastos en directivos y personal de confianza; recortar gastos de operación; recortar viáticos y horas extraordinarias; y cancelar programas mal evaluados.

Partiendo por la situación del empleo en el Estado, argumentó que, si excluyen Salud, Educación, Seguridad y Justicia, los resultados en términos de ahorro serían “exiguos”, de solo US\$ 205 millones por incentivos al retiro.

En cuanto a los directivos y personal de confianza, Marcel calculó que solo representan 0,6% del empleo total en el Gobierno Central, lo que en términos de gasto representa cerca de US\$ 100 millones. ¿Y los gastos en operación? Si se excluye Salud, los desembolsos en la compra de bienes y servicios se han restringido “fuertemente” en los

últimos años y se mantienen en niveles similares a 2019.

Sobre los viáticos y horas extraordinarias, señaló que el escenario es similar, ubicándose hoy en niveles incluso menores a 2018.

Ahora, respecto a cancelar programas mal evaluados, Marcel argumentó que el 90% del gasto público es rígido y mandado por una Ley, por lo que si bien hay espacios de mejora en diseño, implementación y medición de resultados, “es poco razonable –sin reformas legales– hacer cambios que muevan la aguja presupuestaria”.

Despejado el tema, cerró con una interpelación a la clase política: “La respuesta a las tensiones fiscales no puede ser el voluntarismo ni la motosierra”.

De hecho, señaló que las cinco propuestas que se han mencionado en el debate público permiten al Fisco ahorrar US\$ 316 millones, lo que significa 0,09% del PIB; mientras que cinco medidas que pone Hacienda sobre la mesa –revisión periódica del gasto, reducción del gasto en licencias médicas en el Estado, cambio del sistema de financiamiento para la educación superior, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y aumentar las fiscalizaciones en temas sociales– permitiría al Estado ahorrar US\$ 1.540 millones a largo plazo, un 0,5% del PIB.